Polonia

Estudios
Latinoamericanos

Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos

ISSN 0137-3080

Original title / título original:

Multiculturalidad y derechos humanos: Aportes de las mujeres indígenas en Mexico.

Author(s)/ autor(es):

Laura R. Valladares de la Cruz

Published originally as/ Publicado originalmente en:

Estudios Latinoamericanos, 24 (2004), pp. 111-140.

DOI: <https://doi.org/10.36447/Estudios2004.v24.art6>

Estudios Latinoamericanos is a journal published by the Polish Society for Latin American Studies (Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych).

The Polish Society for Latin American Studies is scholarly organization established to facilitate research on Latin America and to encourage and promote scientific and cultural cooperation between Poland and Latin America.

Estudios Latinoamericanos, revista publicada por la Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos (Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych).

Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos es una asociación científica fundada con el fin de desarrollar investigaciones científicas sobre América Latina y participar en la cooperación científica y cultural entre las sociedades de Polonia y América Latina.

Multiculturalidad y derechos humanos: Aportes de las mujeres indígenas en México

Laura R. Valladares de la Cruz

1. Avances en el reconocimiento de la pluriculturalidad en México

En México existen más de doce millones de indígenas asentados, principalmente, en los estados de Oaxaca (53%); Quintana Roo (37%); Chiapas (35%) y en menor proporción, en Hidalgo, Campeche, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Tabasco, Michoacán, Estado de México, Chihuahua, Sonora, Morelos, Sinaloa, Querétaro, Jalisco y Baja California. Los procesos de migración interna y de desplazamiento internacional han hecho, que todo el territorio nacional tenga hoy la presencia diversa y plural de pobladores indígenas. Esta población constituye un abanico cultural amplio que se expresa en una diversidad de lenguas, formas de organización y entornos geográficos y políticos.

En esta diversidad, los pueblos indígenas comparten condiciones de pobreza extrema y evidente rezago social. Al respecto, algunos indicadores recientes demuestran que 25 de cada cien indígenas ocupados no perciben ingresos; 25% de la población no sabe leer ni escribir; y el 39% de las personas entre cinco y 24 años no asisten a la escuela. Otro de los retratos de la exclusión se refleja en los 6,225 ejidos y comunidades agrarias indígenas, donde el 94% de las tierras son de temporal, con cultivos de bajo rendimiento y en la agudización de los problemas de salud entre esta población: desnutrición, alcoholismo y mortalidad por enfermedades curables.

En este contexto, los pueblos indígenas se han organizado por mejorar sus condiciones de vida y conseguir entornos políticos de respeto a su diversidad que

posibiliten su reproducción cultural; los pueblos indios son hoy actores políticos relevantes que reclaman el ejercicio y reconocimiento de un conjunto de derechos colectivos y culturales que les permitan impulsar sus propias formas de organización y desarrollo, para ejercer una existencia colectiva diferenciada con dignidad.

La lucha por los derechos colectivos ha sido la bandera de los pueblos indios en la última década y ha representado un cuestionamiento fundamental a la construcción de los proyectos democráticos de la nación, así como a los supuestos que guían las acciones de gobierno dirigidas a los pueblos indígenas. En este proceso, la construcción de las agendas indígenas ha permitido hacer visibles distintos actores y sectores de los pueblos indios que además de integrar la diversidad étnica y cultural del país, han complejizado el panorama de la negociación política entre el Estado, la sociedad nacional y los pueblos indios; pero también al interior de los pueblos indígenas, al evidenciar la existencia de procesos de cooperación y conflicto que se suscitan al nivel mismo de las unidades doméstico-familiares.

Los derechos colectivos se han formulado a partir de los diversos procesos de lucha indígena y en los distintos foros políticos en que se ha generado esta interacción: desde la participación de los pueblos y organizaciones indígenas en la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígenas, promovida por el Congreso de la Unión, así como en las discusiones y planteamientos en torno al proceso de los diálogos (conocidos como los diálogos de San Andrés Larráinzar), que fueron emprendidos entre el gobierno mexicano y la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Entre las demandas más significativas, en tanto que cuestionan el marco jurídico y político del Estado, están la exigencia de incorporar el respeto a los derechos indígenas en la práctica democrática del país, el derecho a la autonomía, derecho a la participación y representación de los pueblos indígenas, derechos jurídicos y de justicia, derecho al desarrollo, políticas públicas construidas de acuerdo a las necesidades y demandas de los pueblos indígenas, la solicitud de recursos económicos, tierra, territorio y recursos naturales.

En este marco en la última década se ha generado una gran discusión sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y el camino no ha sido sencillo, como veremos en las siguientes líneas.

Hubieron de pasar casi dos centurias de vida republicana para que el Estado mexicano se reconociera como una nación pluricultural, cuando en 1992 adicionó el artículo 4º Constitucional. Ese vacío jurídico constitucional se empezó a cubrir con la ratificación en 1990 del convenio 169 de la OIT y con la reforma

al párrafo primero del cuarto constitucional.¹ Esta reforma se procesó y dirigió desde el Instituto Nacional Indigenista (INI) a través de la Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indígenas.² El proceso para lograr la adición a ese artículo tardó tres años, durante los cuales se realizaron diversas reformas legales a Constituciones locales. Destacan entre ellas las que se promovieron al Código Federal de Procedimientos Penales y al mismo Código para el Distrito Federal el 8 de enero de 1991 que estableció la obligatoriedad de contar con un traductor cuando el indígena sea monolingüe o “no entienda suficientemente el castellano”, así como la facultad de solicitar reposición de procedimiento en caso de incumplimiento a este requisito y la de ofrecer dictámenes periciales sobre los factores culturales que inciden en los hechos constitutivos del presunto delito. Con esta reforma se abrió la posibilidad de terminar con la práctica de procesar a los indígenas en un idioma que no entienden y sobre hechos que en su comunidad suelen tener otra valoración.³ [Gómez 2001: 2]. Así mismo, se reformaron las constituciones locales de Chiapas, Oaxaca e Hidalgo en el espíritu de lo que después resultó la reforma constitucional del artículo 4º.

Entre las grandes limitaciones de éste reconocimiento estuvo el que no se señalaba quien era el sujeto de derecho y cuáles serían éstos derechos, por ejemplo, cuando se señala que en los juicios en que sean parte los indígenas se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas, únicamente se referían a la materia agraria. Se señaló así mismo que la “ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Sin embargo, tres semanas antes se había modificado el artículo 27 constitucional, referido a los derechos agrarios, y en la fracción VII y quedó asentado en el caso de “la comunidad” que: “las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades, en los términos que reglamente el artículo 4º”, sin embargo, dicha reglamentación nunca se llevó a cabo.

¹ Al artículo señalaba que “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbre, recursos y formas específicas de organización social, garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley”.

² Esta Comisión fue instalada el 7 de abril de 1989, por el entonces presidente de la república Carlos Salinas de Gortari y fue presidida por el director del Instituto Nacional Indigenista (INI) e integrada por académicos, funcionarios e indígenas a título individual.

³ Gómez, Magdalena, “La constitucionalidad pendiente: análisis del proceso mexicano de reformas en materia indígena”, Ponencia presentada en el Seminario *Tratados y otros Acuerdos Constructivos entre Estados y Pueblos Indígenas*. Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla, España, 2001.

Posteriormente como una de las resonancias del levantamiento zapatista en el sureño estado de Chiapas, el 1° de enero de 1994, se ha dado una amplia discusión sobre el derecho indígena y su reconocimiento constitucional. Se han acumulado una amplia y rica gama de propuestas y demandas que fueron expresadas en el escenario de la negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno federal. De esta negociación resultaron los primeros acuerdos, correspondientes a la Mesa sobre Derecho y Cultura Indígena, conocidos como Acuerdos de San Andrés y que fueron signados en el mes de febrero de 1996, en cuyo contenido se expresó el compromiso de impulsar una reforma constitucional que reconociera y garantizara los derechos y demandas indígenas.⁴ Posteriormente estos acuerdos se tradujeron en la propuesta de reformas constitucionales elaborada por la una comisión parlamentaria plural, llamada Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA).

La propuesta elaborada por la comisión parlamentaria fue aprobada por el EZLN en tanto que respetaba el espíritu central de los acuerdos pactados. Así, de entre varios artículos de la constitución federal a modificar estaban el 4° y el 115. En el primero se enlistaron una serie de derechos concretos para un nuevo sujeto político llamado “pueblo indígena” donde se reflejaría el principal, que es el de autonomía, y que corresponden a los elementos que han sido parte de la cultura de los pueblos indígenas.⁵ Lamentablemente a pesar de que la parte gubernamental se comprometió a llevar la propuesta de reformas constitucionales a los órga-

⁴ Existen múltiples publicaciones de los Acuerdos de San Andrés entre ellas están la colección de Documentos, Comunicados y Declaraciones del EZLN de la editorial ERA – UNAM, igualmente la Revista Ce-Acatl a difundido buena parte de los documentos indígenas, asambleas, convocatorias etc.

⁵ Entre estos están: 1. Ejercer el derecho a desarrollar sus formas específicas de organización social, cultural, política y económica; 2. Obtener el reconocimiento de sus sistemas normativos internos para la regulación y sanción en tanto no sean contrarios a las garantías individuales y a los derechos humanos, en particular los de las mujeres; 3. Acceder de mejor manera a la jurisdicción del Estado; 4. Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales, salvo aquellos cuyo dominio corresponda a la nación; 5. Promover el desarrollo de los diversos componentes de su identidad y patrimonio cultural; 6. Interactuar en los diferentes niveles de representación política, de gobierno y de administración de justicia; 7. Concertar con otras comunidades de sus pueblos o de otros, la unión de esfuerzos y coordinación de acciones para la optimización de sus recursos, el impulso de sus proyectos de desarrollo regional y, en general, para la promoción y defensa de sus intereses; 8 Designar libremente a sus representantes, tanto comunitarios como en los órganos de gobierno municipal de conformidad con las tradiciones propias de cada pueblo; 9. Promover y desarrollar sus lenguas y culturas, así como sus costumbres y tradiciones tanto políticas como sociales, económicas, religiosas y culturales. Para una revisión amplia de este proceso y su análisis jurídico véase el trabajo ya citado de Magdalena Gómez [2001].

nos de decisión nacional, el entonces presidente de la república Ernesto Zedillo (1994-2000), veto y reformó dicha propuesta, lo que llevó a que el EZLN se retirara de las negociaciones y se declaró en resistencia en su zona de influencia.

A cuatro años de la firma de los acuerdos el nuevo presidente de la república (Vicente Fox), electo para el sexenio 2000-2006, envió la iniciativa de la COCOPA al Congreso de la Unión en diciembre del año 2000, pero lamentablemente el texto original fue ampliamente modificado y “desnaturalizó” el reconocimiento constitucional de los pueblos indios y transformó los derechos exigidos a meras “acciones de gobierno”.⁶

Me parece que son dos los procesos sociales, antagónicos entre sí, los que nos permiten entender este tardío y acotado reconocimiento de derechos y lo mucho que falta por hacer de nuestra nación un espacio más democrático y con respeto a la multiculturalidad. Estos procesos tienen que ver, primeramente con el proyecto neoliberal implementado desde la década de los ochenta, y el segundo se refiere a las movilizaciones indias por la ciudadanía multicultural⁷ y por la democratización de la vida nacional. Movimiento por el que algunos estudiosos llaman con razón a la última década del siglo XX como la del México autonómico y de la revuelta por la dignidad.

En cuanto al primer proceso, sabemos que la reforma del Estado que ha vivido el país ha significado el fin del “Estado de Bienestar Social”. El mexicano fue un Estado cuya política social, heredada de la revolución de 1910 lo situaron como paternalista, subsidiador del desarrollo y redistribuidor de la riqueza, dicho papel fue consagrado en la Constitución de 1917, específicamente en sus artículos 3º, sobre el carácter de la educación que imparte el Estado: laica, obligatoria y gratuita, el artículo 123 que reglamentó los derechos de los trabajadores y el artículo 27 que reconocía el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de la tierra de ejidatarios y comunidades agrarias. [Valladares 2004]

Sin embargo, a partir de la Reforma del Estado y con el argumento de la ineficiencia del Estado por sus prácticas corruptas y clientelares en la distribución de los recursos federales, por su incapacidad para pagar la deuda externa, su ineficiencia en la administración de las más de 1,000 empresas que poseía, las cuales fueron desmanteladas, lo mismo empresas estratégicas para el desarrollo nacional (siderurgia, ferrocarriles, telefonía, entre otras) que las destinadas a apoyar al agro nacional. Se dio inicio con estos argumentos al desmantelamiento de una estructura política incapaz de generar un crecimiento tanto a nivel macro econó-

⁶ Gómez 2001, pp. 4,5.

⁷ Por ciudadanía multicultural entendemos.

mico como para revertir el proceso de empobrecimiento de amplias capas sociales. De manera simultánea se instauró una política social que se encaminó al combate a la “pobreza extrema”, con la distribución de reducidos recursos económicos. A cambio de este desmantelamiento el proyecto político el gobierno se comprometía a instaurar una mayor democracia y transparencia en el manejo de los recursos federales. [Díaz-Polanco 1996: 139-175, Oehmichen 1992: 47-62].⁸

La democracia neoliberal se dice comprometida con los procesos autogestivos y con ciertos grados de autonomía de los actores sociales.⁹ En este sentido en el ámbito indígena, esto supuso una modificación de la política del Estado frente a los indígenas, es decir, del indigenismo, que pasó de considerarlos sujetos de una política dirigida a “mayores de edad”, es decir, a sujetos capaces de desarrollar proyectos autogestivos; dicha política se cristalizó en el arribo de créditos a campesinos e indígenas sin la intermediación de las organizaciones corporadas del Estado o de los grupos de poder locales y regionales, se instauraron proyectos como el “Programa Nacional de Solidaridad” (PRONASOL), el PROCAMPO y Alianza con el Campo pero con pocos resultados para mitigar los rezagos de la estructura económica y mucho menos responder a los reclamos de mayor autonomía política.

Por otro lado, ésta “mayoría de edad”, fue acompañada de la ya comentada contrareforma agraria que al modificar el artículo 27º Constitucional abrió la posibilidad de introducir al mercado las tierras de campesinos y comunidades agrarias, esto a través del cambio del régimen de propiedad ejidal y comunal por el de propiedad privada. A este proceso se le ha calificado de “etnofagia”, [Díaz-Polanco 1997] es decir, que por un lado reconoce la composición pluricultural de la nación y por otro se pone en entredicho el sustento de reproducción de los pueblos indígenas: la tierra.¹⁰

⁸ Sobre la política social del neoliberalismo y su impacto en la política indígenas véase los artículos de Díaz-Polanco, Héctor, Autonomía, territorialidad y comunidad indígenas, en: Casanova y Roitman (coord.) *Democracias y Estado multiétnico*, pp. 139-175; Oehmichen, Cristina, El indigenismo y el modelo gubernamental de la política social neoliberal, en: Cuadernos Agrarios 16, *Nueva Época*, México, 1999, pp. 47-62.

⁹ Véase una interesante crítica sobre la propuestas neoliberales sobre la libertad y democracia en los trabajos de Macleod, Morna, *Poder local. Reflexiones sobre Guatemala*, Magna Terra, Guatemala, 1997 y González Casanova, Pablo, Globalidad, neoliberalismo y Democracia, en: González Casanova y John S. Fernández (coord.), *El mundo actual: Situación y perspectivas*, Siglo XXI – UNAM, México, 1996.

¹⁰ Díaz-Polanco, Héctor, *La rebelión zapatista y la autonomía*. Siglo XXI, México, 1997.

Así a pesar de los discursos de reconocimiento de la pluralidad y de la apertura democrática que ha vivido el país en la última década, entre los que están por ejemplo, que tenemos un respeto del voto electoral, una mayor competencia partidaria, reacomodos y cambios en los diferentes niveles de gobierno desde el local, regional y nacional. Estamos viviendo ó sufriendo por primera vez, después de 70 años de gobernantes procedentes de un mismo partido político, la alternancia en el poder, pues a partir del año 2000 se instauró un gobierno de derecha. Por supuesto, hay continuidades en los planteamientos neoliberales previos, solo que con un giro más conservador, existe una amplia retórica sobre la apertura democrática y la transparencia en el manejo de recursos, pero se siguen manteniendo los programas populistas de reparto de recursos a familias en extrema pobreza. En tan sólo seis meses de nuevo gobierno se han dado cambios fundamentales de carácter conservador cuando no abiertamente antipopulares y antidemocráticos, de los cuales solo comentaremos dos porque implican directamente a los pueblos indígenas.

El primero tiene que ver con la aprobación por el Congreso de la Unión, en el mes de julio de 2001 de una “Ley Indígena” que se aparta sustancialmente de la Ley propuesta por la COCOPA. La ley aprobada recientemente no reconoce a los pueblos indios como sujetos de derecho, se olvidan de aquella “mayoría de edad” otorgada por su propio proyecto político y ahora se les reconoce como “entidades de interés público”, por lo que los indios vuelven a ser “menores de edad” como objetos de asistencia social, es decir, sujetos a una política por y desde el Estado. Se reconoció el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, pero se dejó en manos de los congresos locales la reglamentación respectiva.

El segundo cambio en la política estatal, está muy relacionado con el anterior y es el más claro ejemplo de este grave retroceso, y es la firma del plan de desarrollo, llamado Plan Puebla Panamá que involucra a todos los países centroamericanos y los estados del sur de la república mexicana, y fue hasta hace poco que los ciudadanos pudimos conocer el contenido general de dicho plan que consiste en implementar en la región desarrollos turísticos, proyectos de infraestructura y energéticos, para lo cual se planea atraer a inversionistas nacionales y extranjeros para crear “polos de desarrollo” en esa empobrecida y subdesarrollada región; de tal suerte que los indios y campesinos de esas tierras deberán olvidarse de sus reclamos autonómicos y participar como “beneficiarios potenciales” de proyectos planeados desde el Estado, otra vez como menores de edad serán sujetos del desarrollo y no actores de su futuro.

Lastimosamente el panorama mexicano no es nada alentador, no se puede hablar del reconocimiento de una ciudadanía multicultural basados en una retóri-

ca gubernamental que la hace parte de su discurso democratizador, mientras que se sigan sumando contrarreformas.

Por otro lado, debemos reconocer que estos reconocimientos constitucionales son el resultado de la confluencia de diferentes procesos y actores sociales, por un lado, el reconocimiento de derechos colectivos y derechos a las minorías en todo el planeta, por otro lado, es también una respuesta a los conflictos de carácter étnico que han recorrido el territorio nacional, desde hace ya más de tres décadas y especialmente después del levantamiento zapatista. Un tercer elemento tiene que ver con la discusión en general sobre la defensa de los derechos humanos de las poblaciones indígenas. Que como veremos más adelante, el panorama es todavía desalentador.

En lo que se refiere al reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas tenemos el siguiente panorama, hasta el año 2004, son 18 los estados de la república que han reconocido en sus constituciones su composición pluricultural y han legislado en correspondencia con la nueva ley indígena, que reconoce el derecho de los indígenas a la autonomía, en este contexto tenemos que sólo cinco estados han elaborado una ley reglamentaria que puntualiza derechos, competencias y sujetos de derecho, estos son los estados de Oaxaca, con dos reformas importantes, una específicamente sobre la autonomía indígena y otra reforma al Código de Procedimientos Electorales, que en 1995 abrió la posibilidad de elegir a sus autoridades por Usos y Costumbres, es decir en Asamblea Comunal y no por el sistema de partidos políticos, la del Estado de Chiapas, en esa convulsionada entidad fue donde se generó buena parte del debate autonomista, sin embargo, cuenta con una legislación alejada de los reclamos indios, otro estado con ley reglamentaria es Campeche, mientras que el cuarto estado es Quintana Roo, que es un caso relevante porque elevó a rango constitucional un interesante sistema de justicia india, y el quinto estado es San Luis Potosí, cuya reglamentación se concretó en el año 2003, que si bien reconoce el derecho a la autonomía y la impartición de justicia de acuerdo a los “usos y costumbres”, el sujeto de derecho es la comunidad indígena y por tanto reconoció a la Asamblea comunal como el órgano máximo de gobierno.

Entre otros de los rubros donde se reconoce la multiculturalidad del país están el establecimiento de la IV Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especializada en atender las denuncias de los miembros y/o pueblos indígenas. Se ha establecido dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) un programa de educación intercultural. Así mismo, al interior de la Procuraduría General de la República, existe la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, y en el Congreso de la Unión se estableció una

Comisión de Asuntos Indígenas. Tenemos pues, adelantos en materia de política pública y en materia legislativa, insisto estos últimos son considerados acotados en relación a las demandas del movimiento indígena organizado. Quedan aún grandes retos, como es el que dichas reglamentaciones se cumplan y los pueblos puedan ejercer dichos derechos y segundo reducir los niveles de pobreza e inequidad que reinan en el campo mexicano, así como fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

2. Los derechos humanos de los pueblos indígenas

A pesar de los avances que se han realizado a lo largo de la república por difundir y crear una vida institucional y social donde prevalezca una cultura de la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos, todavía es mucho lo que falta por hacer. Ahora bien, si nos remitimos a los datos más recientes sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, nos podemos dar cuenta de los retos que enfrentan todos los actores sociales involucrados en promover un modelo donde la democracia sea acompañada y garante de mayor justicia y equidad social. En el informe presentado el pasado mes de junio por el relator de derechos humanos de los indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, se da cuenta de la terrible situación que guarda el 12% de la población de nuestra nación:¹¹

La vulnerabilidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas presenta varias aristas. Se observan violaciones de los derechos humanos en el marco de numerosos conflictos agrarios y políticos en las regiones indígenas, y principalmente en el contexto de sistema de procuración y administración de justicia. La discriminación contra los indígenas se manifiesta en los bajos índices de desarrollo humano y social, la extrema pobreza, la insuficiencia de servicios sociales, la manera en la cual las inversiones y proyectos productivos son puestos en práctica, y la gran desigualdad en la distribución de la riqueza y los ingresos entre los indígenas y no indígenas.

La reforma constitucional de 2001 en materia indígena no satisface las aspiraciones y demandas del movimiento indígena organizado, con lo que

¹¹ En la resolución 2001/57 de las Naciones Unidas se estableció el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. El informe sobre México fue presentado el viernes 11 de junio en la ciudad de México.

se reduce su alcance en cuanto a la reanudación del diálogo para lograr la paz en el Estado de Chiapas.¹²

Si bien la defensa de los derechos humanos y los derechos colectivos reconocidos en el mundo forman ya un cuerpo legislativo que permite a los pueblos indios reivindicar una nueva relación con el Estado, existen por lo menos dos niveles de análisis que se refieren a la compleja realidad sobre el uso político de los derechos humanos que ocurre en México, inicialmente señalaremos que existe un gran desconocimiento entre los indígenas sobre los derechos ciudadanos y los derechos colectivos que les asisten como miembros de un pueblo indígena, esta situación los coloca en una situación de vulnerabilidad, por lo que inicialmente es importante difundir y promover una cultura de los derechos humanos que permita poner alto a las arbitrariedades que cometen diferentes funcionarios o representantes del poder político y judicial en nuestro país.

En cuanto al primer nivel al que aludimos sobre el uso político de los derechos humanos se ha documentado que algunas autoridades, apelando a la existencia de violaciones a los derechos humanos al interior de los pueblos indígenas, por parte de las autoridades indias, se ha detenido a autoridades indígenas o líderes de movimientos o comunidades sin mediar un proceso jurídico y violando los derechos que la propia ley nacional e internacional otorgan a estos pueblos, existen detenciones con claros objetivos políticos, pues se ha detenido a líderes que cuestionan las estructuras locales caciquiles o que se oponen al modelo político nacional, un claro ejemplo de esta situación se dio cuando se dismantelaron algunos municipios autónomos zapatistas, en el estado de Chiapas. En este rubro el informe del relator de derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas es contundente y recomendó al gobierno mexicano que:

88. El sistema nacional de ombudsman (Comisión Nacional y Comisiones Estatales de Derechos Humanos) debe fortalecer sus áreas de atención a los derechos humanos indígenas, con particular énfasis en el sistema judicial.

89. Deber ser procesado y sancionado penalmente todo policía de cualquier corporación, militar o autoridad civil culpable de practicar torturas físicas o psicológicas a detenidos indígenas o no indígenas, y el delito de tortura debe ser incorporado a los códigos penales de los estados.

¹² Este informe de Naciones Unidas fue presentado en México en el mes de junio de 2004.

91. El poder federal y estatal y el sistema nacional de ombudsman deben velar porque la legislación y la justicia no sean utilizadas por intereses caciquiles y autoridades locales para criminalizar y penalizar la legítima protestas o disidencia social.

Un segundo rubro vinculado con el uso político de los derechos humanos, tiene que ver con la oposición de la mayor parte de los integrantes del Congreso de la Unión y de diferentes actores políticos nacionales a reconocer o elevar a rango constitucional los “usos y costumbres” de los pueblos indígenas, porque son atentatorios de los derechos de las mujeres, así la mayoría de los legisladores han argumentado que no tienen intención de perpetuar esa discriminación, este rubro ha generado mucha polémica en virtud de la difusión de casos sobre la venta de mujeres, la existencia de violencia intrafamiliar y la ausencia en la toma de decisiones de las mujeres al interior de sus pueblos, estas problemáticas se han catalogado por algunos como parte de los “usos y costumbres”, sin duda éstos casos existen, pero si algo han dejado claro las mujeres indígenas, es la importancia de reconocer las autonomía de sus pueblos y erradicar las prácticas que vulneran sus derechos.

Si bien, no podemos hacer un balance positivo sobre la situación de los derechos humanos en México, es justo reconocer que hay avances, modestos pero significativos, por ejemplo, al interior de las comunidades indígenas la promoción de los derechos humanos a llevado al cuestionamiento de algunas prácticas que amparadas en la tradición excluyen importantes sectores como son los jóvenes y las mujeres. En otra arena pero también vinculada con el impacto de la promoción de los derechos humanos, se puede observar en las organizaciones indígenas, pues casi en todas sus reuniones uno de los puntos fundamentales es justamente la situación de los derechos humanos de sus pueblos, incluso existe una clara influencia sobre los líderes indígenas, muchos de ellos se formaron o fortalecieron sus liderazgos y plataformas reivindicativas por su acercamiento con organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, como son los vínculos con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, entre otras muchas, que han abonado el camino para que los derechos colectivos sean un arma más con la que los pueblos indígenas puedan sustentar jurídicamente sus demandas. [Ruiz 1999, Iturralde 1993, Stavenhagen 1988].

Y justamente en el vínculo con instituciones y organizaciones promotoras de los derechos humanos, junto con la movilización de cientos de mujeres indígenas en el país es donde más claramente podemos ver el impacto de la “cultura” los

derechos humanos en la situación que viven las mujeres indígenas y cómo a partir de encuentros con diversas organizaciones, feministas, académicas y el movimiento zapatista vienen exigiendo el fin de aquellas prácticas tradicionales que las mantiene en condiciones de subordinación, y sobre este proceso nos referiremos en las siguientes páginas.

2.1 Derechos humanos, género y los “usos y costumbres”

La emergencia de las mujeres indígenas como actrices políticas que demandan autonomía para sus pueblos y que reclaman derechos propiamente de género ha sido uno de los procesos más ricos y significativos en la última década, su militancia en organizaciones sociales, ONG., en las filas del EZLN, más la experiencia de algunas pocas que han conquistando cargos de gobierno a nivel municipales ha dado una visibilidad enorme [Valladares 2003, Barrera 2002, Velásquez 2003, Daltón 2003, Hernández 2000]. Se trata de mujeres que a partir de la defensa de su pertenencia étnica reclaman también nuevas relaciones al interior de sus pueblos.

La expresión más conocida de la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios es sin duda, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es también en este marco donde la existencia de una demanda por el respeto y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres indígenas también se hizo patente:

*En este surgimiento de los pueblos indios, las mujeres zapatistas integrantes del EZLN con su Ley Revolucionaria de Mujeres, abrieron cauces y legitimaron en sus comunidades la urgente participación de las mujeres. Los derechos que se nos han negado por tantos años se hicieron ‘pensamiento’ y ‘acción’ en las ‘Leyes de las Mujeres’. Y entonces dijimos: ‘No queremos que nos obliguen a casarnos con el que no queremos; queremos tener los hijos que nosotras queramos y podamos cuidar; queremos tener derechos a cargo en la comunidad; queremos tener derecho a decir nuestra palabra’.*¹³

¹³ Entre las publicaciones relevantes que han recopilado la voz de las mujeres indígenas a lo largo de foros, reuniones, seminario y encuentros se encuentra el texto de Margarita Gutiérrez y Nellys Palomo, “Autonomía con mirada de mujer”.

En una de las posiciones más avanzadas en materia de derechos de las mujeres indígenas, la defensa se asume en tres planos: desde el cuerpo o ámbito personal, en el plano comunitario y en el nivel organizativo, atravesados por un reconocimiento decidido de la pertenencia étnica y la identidad genérica.

La falta de audiencia para las demandas diferenciadas expresadas por las mujeres indígenas, se finca en el hecho de que en la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas, el ‘movimiento indígena’ ha fundamentado sus reclamos en dos ejes ideológicos: por un lado, la superación de la condición de subordinación y de la exclusión a las que la nación ha condenado a los pueblos indios; y por otro, la demanda de respeto y de garantías para la reproducción social y cultural de los grupos indígenas en el marco del ejercicio de sus derechos y de respeto a sus propios sistemas de autoridad, representación y gestión. En esta demanda doble, la defensa de una comunidad idealizada ha jugado un papel definitivo. Dentro de estas movilizaciones, los pueblos indígenas sostienen que las formas tradicionales de organización colectiva, de decisión, de control sobre los recursos y de representación, agrupadas gruesamente bajo la ‘comunidad’, constituyen formaciones sociales horizontales, armónicas, representativas e incluyentes.

En este contexto, la demanda de un espacio de participación por parte de las mujeres indígenas organizadas en ámbitos no tradicionales y con plataformas de género representa, un cuestionamiento a todo el andamiaje social que sostiene a las comunidades y sus estructuras de autoridad y representación, y determina la necesidad de incorporar estas nuevas realidades y demandas en la discusión del concepto de ‘pueblo’ indígena como sujeto político. [Bonfil 2003: 6-14].

En este sentido, las demandas indígenas actuales incluyen reivindicaciones específicamente femeninas que acentúan su particularidad. Aparece entonces, un entrecruzamiento de difícil resolución que muchas veces se toma por enfrentamiento, entre las demandas y movilizaciones específicas de las mujeres indígenas y los ejes rectores o las demandas fundamentales de los pueblos indios.

Muy especialmente, las banderas indígenas de la “comunalidad” y la defensa de la indianidad desde una perspectiva de militancia cultural, han planteado a las organizaciones de mujeres indígenas, serios, si bien no necesariamente reales, problemas de lealtades y pertenencias pues, pues se arguye que la herencia indígena tiene una tradición de complementariedad en la que las demandas de género se consideran como una desviación occidental, ajena, divisoria e impuesta.

Pese a lo anterior, un análisis de las propuestas y demandas concretas de los pueblos indios y sus mujeres permite establecer que los intereses y planteamientos que las indígenas tienen para sí y para el conjunto de la sociedad, no se oponen a la lucha de sus pueblos y sí representan, en cambio, una posibilidad de

conformar estructuras sociales más incluyentes. En este sentido, la construcción de una ciudadanía para las mujeres en el marco de la "comunalidad", constituye el principal dilema para las organizaciones y demandas de las indígenas.

Las demandas de las mujeres indígenas, expresadas a través de sus organizaciones no tradicionales, fundamentan y defienden la importancia de la comunidad en la vida femenina indígena, así como la existencia de agendas de género profundamente cuestionadoras del control del poder en el ámbito familiar, comunitario y étnico. La movilización de las mujeres indígenas por las causas de sus pueblos y en defensa de sus propios derechos, ha generado una experiencia poco conocida y menos reconocida, así como una nueva interlocución social con un sector que exige respuestas particulares del gobierno, de la sociedad nacional y de las propias comunidades y organizaciones indígenas.

La década de los noventa ha demostrado la existencia de una movilización indígena femenina que, por un lado, recupera la estructura tradicional de autoridad y participación en las comunidades, al reactivarla y hacerla vigente en la era de la globalización, la modernidad y la individualidad; mientras al mismo tiempo, se apropia de los elementos, banderas y fuerza de otros movimientos sociales por la equidad y la justicia.

La experiencia acumulada permite sustentar que la participación pública de las mujeres indígenas conserva el carácter colectivo tradicional de las movilizaciones indias y que si bien hay líderes identificables, remite siempre al sujeto colectivo expresado en la comunidad, el grupo, el pueblo o la etnia. El trayecto recorrido por las mujeres indígenas a través de sus líderes y organizaciones permite ya identificar una serie de demandas que no han sido atendidas y que remiten a la manera en que se establecen la autoridad y las decisiones en los ámbitos comunitarios y, en última instancia, a la forma en que se ejerce el derecho indígena y las repercusiones que ello tiene en el posicionamiento de las mujeres ante de la familia, la comunidad, el mercado y el Estado. Entre los cuestionamientos sin respuesta y que merecen documentarse los siguientes:

En el ámbito familiar, en lo que ellas han denominado el ámbito del cuerpo y la familia, las mujeres han expresado

este ha sido uno de los temas que más hemos discutido con las autoridades, con los ancianos, y con las madres y padres, queremos que esta costumbre cambie, ya que nos sentimos tratadas como cosas, como si no valiéramos nada y que nuestro cuerpo se le puede ofrecer a cualquiera sin nuestro consentimiento, pensamos que esta costumbre tiene que cambiar [Gutiérrez, Palomo 1999: 56]

En este aspecto, los reclamos y denuncias de las mujeres indígenas en diversos foros han girado en torno a derechos humanos elementales como: la opción de escoger cónyuge y el momento del matrimonio; la posibilidad de construir relaciones no violentas dentro de la pareja y la familia, libres también del problema del alcoholismo; el derecho a la herencia; el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos; el derecho a acceder a los recursos de la familia (tierra, animales, dinero y propiedades en general).

Por otro lado, las mujeres indígenas han reclamado el reconocimiento del derecho de niñas y mujeres a acceder a la educación, a la salud, a la alimentación, al afecto y a la no-discriminación.

Dentro del ámbito de la familia, las mujeres indígenas también han reclamado espacios propios de autonomía y libertad que se refieren a la posibilidad de tomar decisiones personales sin depender de terceros; a la posibilidad de desplazamiento dentro y fuera de la comunidad sin sufrir las consecuencias del señalamiento, el maltrato o la agresión directa; la libertad de decidir informadamente sobre su vida reproductiva y la libertad de involucrarse en actividades generadoras de ingresos y de controlar los recursos que de ello se deriven.

En el ámbito comunitario. En este espacio, las mujeres indígenas reclaman especialmente la revisión del orden jurídico comunitario que las excluye del acceso directo a los bienes colectivos. En ese sentido, han denunciado, por ejemplo, que su acceso a la tierra aparece siempre mediado por su relación con un varón (padre, esposo o incluso, hijo) y que por tanto, su participación en los órganos de autoridad tradicionales, también es indirecta lo que se traduce en que sus necesidades y demandas no siempre sean atendidas.

En este mismo sentido, las mujeres indígenas han reclamado su derecho a opinar sobre el uso y control de los recursos de la comunidad, naturales, culturales y políticos; así, por ejemplo, entre las propuestas conjuntas firmadas por el EZLN y el gobierno federal en el marco de los Acuerdos de San Andrés se estipulaba "Legislar sobre los derechos de los pueblos indígenas a elegir sus autoridades y ejercer la autoridad de acuerdo a sus propias normas en el interior de sus ámbitos de autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad".

Así, existe ya una reflexión inicial de las mujeres indígenas que identifica las barreras culturales para su participación pública y en la toma de decisiones que se suman al menosprecio social compartido por las prioridades y necesidades de las mujeres y que se expresan en los conceptos de: "temor", "miedo a equivocarse", "temor al qué dirán", "timidez", "inseguridad", "vergüenza" y "no sé", "no participo por el miedo de hablar y por el miedo de no ser escuchada por los demás".

Nosotras las mujeres indígenas, queremos ser reconocidas como personas con derechos y no sólo con obligaciones. Necesitamos que nos vean junto a nuestras familias y comunidades, no sólo como cocineras y cuidadoras de niños, sino como seres humanos, como mujeres. Eso es lo que queremos, que ya no nos vean como personas de segunda categoría. Necesitamos que escuchen nuestras voces como la expresión de un solo pensamiento y un solo corazón, para que se refuerce nuestra posición como pueblos indígenas [Chancoso 1997: 4-7]¹⁴.

Dentro del ámbito comunitario es donde se expresa con mayor fuerza la demanda indígena por la autonomía, plenamente compartida por las organizaciones y representantes de las mujeres de estos pueblos. No obstante, es aquí también donde se construye la interlocución con las instituciones de los distintos niveles de gobierno, ya que es en este plano de la organización indígena, donde se aterrizan las acciones de gobierno y la canalización de los recursos que se dirigen a los sujetos indígenas.

En estos espacios, las organizaciones de mujeres indígenas han demandado una interlocución directa con los representantes del Estado, con las instituciones y con los actores políticos en el ámbito nacional, para dar respuesta a sus demandas de género en materia de generación de ingresos, organización no tradicional, participación en la toma de decisiones y otros temas de atención a las preocupaciones femeninas de los pueblos indígenas.

En el ámbito étnico. Es en este ámbito donde la demanda de género de las mujeres indígenas se acerca más estrechamente a las plataformas y agendas del movimiento indígena amplio. En el camino recorrido, las mujeres han denunciado el atropello a su derecho a vivir la diferencia con respeto y dignidad; la discriminación, la exclusión y la marginación a las que han sido relegadas por la sociedad y el sistema nacional. En ese sentido, también han expresado que debido al rol de género que les ha tocado cumplir, su relación subordinada con la sociedad no indígena se manifiesta de manera más violenta: el abuso, el maltrato y la explotación de su cultura, sus valores y sus productos son algunas de las formas en que se reproduce lo que ellas mismas han llamado su triple marginación: por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas.

¹⁴ Blanca Chancoso, Segundo encuentro continental de mujeres indígenas, México, 4-7 de diciembre 1997, citado en: Diana Vinding (ed.), *Indigenous women: the right to a voice*, IWGIA, Copenhagen, 1998.

En este aspecto, las mujeres indígenas también han señalado la falta de condiciones concretas para que se cumpla el mandato constitucional de garantía y protección al carácter multiétnico y pluricultural de la nación; que se expresa en la diferencia de condiciones para acceder a una vida digna que se acentúa en ellas, como sector social específico y frente a la media de la población femenina en el ámbito nacional.

Como puede observarse en este breve análisis de contexto, existen una serie de planteamientos explícitos por parte de las mujeres indígenas, relativos a su ubicación de género dentro de los marcos normativos tradicionales y en el ejercicio del derecho indígena, que convocan a una reorientación de las prácticas comunitarias. En este sentido el proyecto “Voces Diferentes y Voces Discordantes” que es la base de esta reflexión, se planteó documentar las diferentes voces femeninas indígenas en relación a la situación que guardan los derechos humanos en sus culturas y dar a conocer sus principales demandas.

3. Mujeres indígenas como promotoras de derechos humanos

Con esta perspectiva el proyecto titulado “Voces Diferentes y Voces Discordantes” Perspectivas y Propuestas de las mujeres indígenas en los marcos normativos tradicionales. Género, “usos y costumbres” fue elaborado por la Dirección de Capacitación y Organización Social de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y tuvo el objetivo de capacitar a un grupo interétnico de mujeres líderes en la temática de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres indígenas.

Se trató de un proyecto ambicioso e interesante que se planteó cinco ejes fundamentales de trabajo: 1°. La capacitación en derechos humanos, en las tres vertientes ya mencionadas, 2°. Preparar a las participantes en la metodología de “talleres de reflexión”, que involucró el conocimiento de legislaciones nacionales e internacionales sobre derechos humanos y derechos de las mujeres, así como el manejo de material didáctico para facilitar el aprendizaje (películas, laminógrafos, fotografías, rompecabezas, entre otros), además de la enseñanza de técnicas y dinámicas para estimular la participación y la reflexión de las y los asistentes en talleres comunitarios, esta fase de la capacitación fue compleja, pero logramos conformar un grupo que adquirió un manejo adecuado de estas metodologías, además ésta fase fue central en virtud de que la segunda etapa del proyecto involucraba otras actividades, y de aquí los siguientes ejes de trabajo, el 3°. Cada participante se comprometió a realizar dos talleres en comunidades de

su región o municipio para difundir los derechos humanos; 4°. Construir de manera colectiva un diagnóstico sobre la situación de los derechos de las mujeres en el marco de sus culturas indígenas, 5°. Proponer cambios en aquellas prácticas culturales que las mantienen en condiciones de subordinación y con las que no están de acuerdo, así como revalorar y fortalecer aquellas que no las vulneran, les dan fortaleza y son el sustento de su pertenencia étnica.

Se trató de una experiencia académica y de praxis comprometida profundamente enriquecedora y me parece que se sembraron semillas de equidad que esperamos puedan difundirse y en el futuro podamos cosechar una mayor armonía entre hombres y mujeres al interior de los pueblos indígenas.

Igualmente resultó importante la difusión de los derechos humanos en las diferentes comunidades y municipios en donde se realizaron los talleres, que fueron 20 en total, en el sentido de que muchas de las violaciones que sufren las comunidades en su conjunto provienen de autoridades, instituciones, representantes del sistema de justicia, militares o caciques, de tal forma que el acercamiento a los derechos que como ciudadanos mexicanos y como indígenas les asisten les permitirán defenderse en mejores condiciones.

En lo que corresponde al equipo de trabajo, éste quedó integrado por un grupo de 5 mujeres nahuas procedentes de los estados de Puebla, Veracruz y Guerrero y 5 mixtecas de Oaxaca, Guerrero y Puebla, los requisitos para ingresar al programa de becarias,¹⁵ fueron que tuvieran un manejo adecuado de español, que supieran leer y escribir y que fueran líderes reconocidas en sus regiones de origen, esto último con el objetivo de poder garantizar que la convocatoria que hicieran para asistir a los talleres comunitarios tuviera una respuesta positiva.

3.1 El trabajo de formación de promotoras de los derechos humanos

Los seminarios de capacitación fueron programados en la ciudad de México, durante una semana completa por mes, tres en total, lo que significó a las mujeres grandes esfuerzos para poder alejarse de sus trabajos cotidianos durante esas

¹⁵ Se conformó el equipo gracias a los recursos con que contó el proyecto que nos permitieron becar a las participantes por un periodo de seis meses, además se logró sufragar los gastos de la capacitación de tres semanas intensivas en la ciudad de México. Para garantizar el buen desarrollo de los talleres comunitarios a cada indígena se le otorgó una serie de libros y materiales didácticos que fueron la base de su capacitación como promotoras de los derechos humanos ("talleristas") y que posteriormente ellas utilizaron en sus comunidades.

tres semanas. El trabajo fue muy intenso, la mitad de día trabajamos con especialistas en materia de derechos humanos, derechos colectivos y derechos de las mujeres y por las tardes nos dedicamos a su capacitación como promotoras o "talleristas". Esta capacitación tuvo ser complementada con el trabajo de ellas en sus comunidades, tanto para organizar sus talleres comunitarios, como para recopilar información para la construcción de un diagnóstico preliminar sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres.¹⁶

Las indígenas que participaron en este proyecto piloto proceden de diferentes organizaciones y/o se caracterizan por tener algún tipo de liderazgo. Todas ellas son mujeres ejemplares, todas tienen una trayectoria de participación en sus comunidades, ya en diferentes organizaciones, sean de productoras u organizaciones políticas, mientras que otras militan en organizaciones expresamente de mujeres indígenas. El promedio de edad estaba en los cuarenta años, solamente dos eran de 26 años, por lo que todas ellas, a excepción de una que es soltera, están o estuvieron casadas (una viuda y dos divorciadas), y en virtud de haberse casado sumamente jóvenes tienen hijos jóvenes y adolescentes.

Uno de los rasgos que me parecieron importantes en las historias de vida de estas mujeres, es que los hijos de todas han tenido oportunidad de estudiar, en el nivel medio y superior, y para las indígenas que tienen hijas jóvenes, todas han tenido la oportunidad y el apoyo para decidir qué estudiar, y o no se han casado, o bien las casadas no lo hicieron de forma concertada. Otra característica relevante es que estas jóvenes han acompañado a sus madres desde que eran niñas a las asambleas, a las tareas de promoción y en los programas comunitarios, lo

¹⁶ El trabajo del seminario estuvo dividido en dos fases metodológicas: a) El seminario taller se dividió en tres módulos de capacitación temáticos y teórico-prácticos, de manera que permitieron a las becarias-promotoras traducir la información, los instrumentos y los conocimientos recibidos, en un análisis preliminar de sus contextos culturales y el marco de sus usos y costumbres, para diseñar gradualmente sus respectivos instrumentos para desarrollar sus propias cartas descriptivas. b) En el lapso entre cada módulo, las becarias-promotoras se aseguraron de contar con la población participante para los dos talleres de reflexión y diseñar la propuesta que llevaron a cabo en las comunidades de su elección. c) El período entre los módulos de formación, también sirvió para aplicar los conocimientos e instrumentos recibidos en la integración de un diagnóstico comunitario sobre la situación de los derechos de las mujeres indígenas. d) Los talleres fueron un espacio para construir una reflexión diferenciada por grupo étnico y colectiva como mujeres indígenas. e) Los resultados permitieron obtener un análisis y una perspectiva representativa de la situación de las mujeres indígenas en cada una de las culturas indígenas participantes. f) A lo largo del proceso de formación y aplicación de los instrumentos (seis meses), las becarias-promotoras contaron con la asesoría especializada y personalizada para el desempeño de sus actividades

que las llevo casi de manera natural a comprometerse o interesarse con la temática del desarrollo, los proyectos productivos, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y en ocasiones a la militancia política. A diferencia de sus madres crecieron en un ambiente mucho más sensible a los derechos de las mujeres y cuentan con el apoyo de sus familias.

El impacto del seminario de formación en las propias participantes fue enorme, pues a pesar de tener una militancia en ocasiones de años y de trabajar en proyectos y organizaciones específicamente de mujeres, no conocían sus derechos, muchas expresaron una suerte de sorpresa al conocer la cantidad de legislaciones que las protegen. Para ilustrar esta situación me voy a permitir comentar brevemente uno de los casos que me parecen puede dar cuenta del impacto del seminario, se trata de la Sra. Delfina, Mixteca que vive en la montaña de Guerrero en el municipio de Igualapa, si bien ella tiene un tiempo trabajando como promotora de salud y ha asistido a algunas de las reuniones de una de las organizaciones indígenas de carácter político más importantes del país, la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), tenía un desconocimiento casi total de sus derechos, y era por cierto la primera vez que salía de su comunidad por tantos días y asumía el compromiso de ser promotora de los derechos humanos. Delfina es viuda madre de 4 hijos y una hija de 14 años que cursa la secundaria, en una de las reflexiones sobre las legislaciones y los derechos de las mujeres ella expresó:

Ya iba a dar a mi hija para casamiento porque ya no podía seguir gastando, pero ahora que sé que tiene derechos la voy a apoyar para que siga estudiando y que conozca los derechos que tenemos las mujeres indígenas.

Este testimonio es tan conmovedor como terrible nos brinda una idea sobre el papel que tienen las mujeres en muchas comunidades indígenas, se les ve como una carga y cuando ya no se puede seguir llevándola, es mejor cederla, casarla o pedir una dote por ella para aligerar el peso de la familia. En este caso particular, Delfina que debe sacar adelante ella sola a su familia, pues es viuda, no es una labor sencilla, en este contexto dos de sus hijos estudian actualmente una carrera profesional y tienen trabajos modestos que les permiten mantenerse en la cabecera municipal, Ometepec, que es el lugar en donde se cuenta con universidades. En cuanto a su comunidad el panorama no es alentador pues no hay posibilidades de empleo y las tierras con que cuentan son muy pobres, por lo que responsabilidad para Delfina es grande y pesada, sin embargo, ahora piensa que

su hija tiene el derecho a que se le brinde la misma oportunidad de estudiar que se les da a sus hermanos. Si en cada comunidad pudiéramos tener este impacto, por lo menos el replantearse esa práctica cultural, que encubierta de estrategia de sobrevivencia violenta los derechos de las mujeres, creo que estamos avanzando mucho.

Logramos realizar 20 talleres comunitarios, todos contaron con una nutrida asistencia, sin embargo, no fue fácil, no en todos lados encontramos sensibilidad para estas actividades, enfrentamos diferentes contratiempos, por ejemplo en el municipio mixteco, Chigmecatitlán del estado de Puebla, se difundió que estaban dando cursos a mujeres para que se separaran de sus esposos y el resultado fue la asistencia de cinco mujeres, este contratiempo se pudo solucionar hablando con el cura del pueblo que ofreció el salón anexo a la Iglesia para impartir del taller y en misa les pidió a las mujeres que asistieran a la capacitación pues era importante que conocieran sus derechos, que no entendía porqué se rehusaban a asistir y les pidió a todas las mujeres que se incorporaran a esta importante labor de difusión y capacitación, así gracias a su intervención es que se pudo re-programar el taller y entonces tuvimos una asistencia nutrida. Esta experiencia nos enseñó la importancia de difundir adecuadamente los objetivos de los talleres y sus beneficios. Por otro lado hubo comunidades en donde se debieron establecer relaciones con las autoridades para que brindaran algunas facilidades para desarrollar las tareas que implican los talleres.

Esto último, el informar a las autoridades es importante, porque en ocasiones, también pareciera que se estaba capacitando para poner en entredicho la forma de ejercer el poder de autoridades mestizas e indígenas. Si bien esto es cierto en muchos casos, también lo es el hecho de que las propias autoridades desconocen los derechos de sus gobernados por lo que es importante sensibilizar y difundir los derechos más allá del grupo de mujeres, en este sentido, por ejemplo, otra experiencia diferente tuvimos en Oaxaca pues las líderes indígenas de Justlahuaca, decidieron dar un taller para las autoridades de sus comunidades y para los líderes, hombres, de su organización el: Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB). Con la intención de difundir qué son los derechos humanos, cuáles los derechos de las mujeres, con el objetivo de apoyar la construcción de una gestión respetuosa de los derechos y sensibles a la problemática y los derechos de las mujeres en el interior de su propia organización y por parte de las autoridades municipales.

En este mismo rubro del establecimiento de vínculos con las autoridades, dos de los talleres realizados en el estado de Guerrero, en Papalutla, en el Alto Balsas y en el municipio de Tulumán, la capacitadora-promotora invitó a las autoridades,

quienes inauguraron los talleres, dieron la bienvenida y se mostraron sensibles a los problemas que viven las mujeres y reconocieron la importancia que la cultura tradicional debía cambiar para respetar a las mujeres y para comprometerse como hombres en las labores de sus hogares.

Otro de los puntos que se convirtió en una constante en todos los talleres, fue la invitación a impartir más talleres, darle seguimiento a la difusión de los derechos colectivos, y reiteradamente se nos insistió que estos "cursos" deben darse a los hombres y a las autoridades, porque no cambia mucho la vida si las mujeres conocen sus derechos, pero en su hogar es difícil desterrar la violencia, el alcoholismo y la cultura que la coloca como objetos, pues hasta ahora la gran mayoría no tiene posibilidad de tomar ninguna decisión, ni siquiera sobre su propio cuerpo.

Para muchas mujeres asistir a talleres se convierte en una espacio de esparcimiento, de descanso, de intercambio de opiniones y de la formación de grupos de apoyo, así como de un espacio para expresar agravios y tristezas, tal vez el tema más reiterado fue el problema del alcoholismo, y su vínculo con la violencia, entre las exigencias expresadas siempre estuvo que les gustaría que se prohibiera la venta de alcohol de sus comunidades.

También tuvimos que ser testigos impotentes ante muchas solicitudes de ayuda, ante círculos que parecieran ser de acero, de mujeres que no desean soportar más violencia física y no pueden dejar a sus esposos porque no hay quien las apoye, ni sus familias, ni las autoridades, no hay empleos que les permitan independizarse y por tanto no pueden mantener a sus hijos y deben quedarse a soportar más violencia, pues no existe en esas apartadas regiones programas o instituciones que apoyen a estas mujeres.

Como resultado de los 20 talleres comunitarios que se realizaron entre los meses de noviembre, diciembre de 2003 y enero de 2004, pudimos obtener un diagnóstico general sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas mixtecas y nahuas en los cuatro estados de la república, los datos nos permiten afirmar que es muy complicado poder hablar de "usos y costumbres" por etnia, porque la situación de los derechos de las mujeres es compartida en todas las comunidades, solamente con pequeñas variaciones, no significativas, por ejemplo en unas se intercambia o vende a las mujeres con mayores cosas que en otra, por ejemplo, en las rancherías de Chicontepec encontramos casos tales como intercambiar a una niña por una botella de aguardiente, en otras por caballos, hasta un caso de promesa de boda por el hecho de que un hombre pagó buena parte de los gastos de la fiesta de quince años de una pequeña niña.

Sobre el mismo caso de los matrimonios concertados, pudimos documentar que existen limitaciones para elegir pareja no solamente para las mujeres sino también para los jóvenes, por ejemplo en el estado de Puebla, en el municipio de Tlaola nos reportaron casos de padres que piden una dote tan grande al novio, para aceptar el matrimonio con su hija que resulta casi imposible reunir el dinero o los bienes que le solicitan, lo que ocasiona ciertamente problemas para los hombres jóvenes. Pues en la mayoría de los casos documentados de matrimonios concertados o la venta de hijas se trata de hombres que tienen muchos años más que las mujeres.

Otra de las prácticas tradicionales compartida se refiere al pago que se hace a una partera cuando trae un niño al mundo, esto también varía de una comunidad a otras, pero la constante es que siempre se pagará más cuando nace un hombre, que cuando nace una mujer, lo mismo en las fiestas en honor del nuevo miembro de la familia, más jubilosas y costosas para hombres.

Encontramos también casos terribles de abandono o regalo de bebés niñas, la casi total ausencia de acceso a la herencia de la tierra y casos extremos de una familia que prefirió adoptar un hombre, para tener un heredero de la tierra, esto en Guerrero.

Lo que sin duda alguna marca el nivel de respeto o la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, es el contexto económico-político y regional en donde está asentada la etnia, por ejemplo las situaciones de mayor pobreza-violencia-militarización, se corresponden con los municipios de la montaña de Guerrero, en donde se concentran los mayores índices de pobreza del país, (Tlacoachistlahuaca, Metlatónoc) que es una zona de tráfico de enervantes y existe la presencia de grupos armados, contra-estatales o revolucionarios, como es el caso del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Así como también la existencia de cacicazgos que han dibujado la historia de estas empobrecidas regiones. [Torres 2000, Aguirre 2003, Gutiérrez 2001].

También vale la pena hablar de la experiencia en una pequeña comunidad llamada Chachahuantla, localizada en el municipio de Naupan, en el estado de Puebla, se trata de una comunidad muy tradicional, y cuando se hablaba en talleres sobre de las restricciones de circulación de tienen las mujeres, le parece adecuado que así sea, lo mismo cuando se planteó el derecho que tienen todas las mujeres a tener novio y a elegir marido, sostenían que estaba mal, que las mujeres debían estar en sus casas y no hablar con hombres. De suerte tal que la promotora de derechos humanos de esa comunidad, Francisca Gallardo, es un caso realmente atípico, tiene cuarenta años y es soltera, es muy activa y reconocida en la comunidad, participan en proyectos productivos estatales, los llamados Fondos

Regionales, participa en el Frente Estatal de Mujeres Indígenas y Campesinas (FEMIC) y forma parte de un movimiento católico de manera muy activa. Tiene un gran reconocimiento en la comunidad, todos acuden a ella en busca de apoyo y consejo. Su incorporación al Seminario "Voces Diferentes y Voces Discordantes" la ha llevado a acercarse a diversas organizaciones e instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, sin embargo, el contexto local es todavía poco sensible a la temática de la equidad de género.

Existe una problemática diferente en la región de Justlahuca, Oaxaca donde los índices de migración son muy altos, los efectos de la entrada de remesas de dólares que envían mensualmente los campesinos migrantes a Estados Unidos de Norteamérica, están ocasionando cambios significativos en las familias receptoras de estos recursos, por ejemplo, que los pequeños abandonen la escuela, que no quieran trabajar, y no sientan mayor angustia que la de recibir sus recursos. Sin embargo, encontramos a mujeres muy activas, pocas todavía, que tienen estudios, que militan en diferentes organizaciones y que están emprendiendo proyectos productivos para mejorar su calidad de vida, en un argumento interesante que proviene de los militantes en el FIOB, es que si se hace negocio en Estados Unidos con los recursos de los migrantes, que ellos también deben de hacer negocio con lo que se les envía, y plantean la posibilidad de canalizar los recursos de las remesas en proyectos productivos, para productos que pudieran venderse tanto en Oaxaca como en las regiones de Estados Unidos en donde se encuentran sus familiares y paisanos.

Tenemos pues una diversidad de situaciones y maneras de emprender la vida cotidiana, por doquier hay esfuerzos de hombres y mujeres por intentar mejorar sus condiciones de vida y el trabajo que cotidianamente hacen estas mujeres promotoras de los derechos humanos es un trabajo muy importante, es cotidiano, comprometido y con muchas limitaciones, a veces señalan la falta de recursos para continuar con su labor, en otras se sienten agobiadas ante tantas solicitudes de ayuda, pero sin duda el nuevo saber que poseen y el reconocimiento de sus comunidades es un aliciente, es un proceso que han construido y que las ha llevado a revalorarse como personas y como miembros de su comunidad.

Con gran esfuerzo y compromiso se pudieron realizar 20 talleres comunitarios y como resultado de estas experiencias obtuvimos un diagnóstico general de problemas fundamentales, las prácticas tradicionales que desean que sean desterrada y una importante labor de difusión de los derechos humanos.

3.2 Diagnóstico de la situación de derechos humanos

Con mucho entusiasmo, angustias y dudas las diez mujeres capacitadas como promotoras y defensoras de los derechos de las mujeres indígenas, pudimos informar e intercambiar opiniones con 915 hombres y mujeres indígenas, (cuadro 1) pudimos dar voz a cientos de mujeres, por lo pronto podemos hacer una balance positivo de la experiencia, pero nos quedan muy claros los retos que faltan por enfrentar, como son la necesidad de dar seguimiento y continuidad a esta tarea de difusión, así como el continuar apoyando a este grupo de mujeres para que su compromiso y esfuerzo no quede solamente en una experiencia piloto, para lo cual se requieren recursos y voluntad de las participantes, de sus organizaciones y de las instituciones.

cuadro 1
Población Indígena participante en los talleres sobre Derechos Humanos
entre diciembre de 2003 y febrero de 2004

Etnia	Estado	Asistentes
Nahuatl	Veracruz Puebla	504
Mixteca	Oaxaca Puebla Guerrero	411
Total		915

Como resultado de esta experiencia presentamos de manera sintética los rubros que sobre la situación de los derechos de las mujeres indígenas existen en sus comunidades y lo que podríamos catalogar propiamente de situación de los derechos de las mujeres en sus culturas o los “usos y costumbres”. (Véase cuadro 2)

cuadro 2
Principales violaciones a los derechos humanos y Situación de los derechos
de las mujeres indígenas en sus comunidades

Violaciones de los derechos humanos En comunidades indígenas por parte del sistema de impartición de justicia e instituciones gubernamentales	Situación de los derechos de las mujeres En las comunidades indígenas
<ul style="list-style-type: none"> - Discriminación por parte de las autoridades - Servicios de salud y educación ineficientes o inexistentes - Manipulación con fines políticos de programas estatales - Detenciones arbitrarias - Militarización y violencia en diferentes zonas, especialmente Guerrero y Oaxaca - Casi nulo acceso al sistema de justicia - Esterilizaciones forzadas - Persecución de líderes 	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de sus derechos fundamentales - Desconocimiento de sus derechos como mujeres - Desconocimiento de sus derechos como mujeres indígenas - Casamientos forzados, venta de mujeres - Reducido acceso a educación - Violaciones - Casi nulo acceso a la tierra - Casi nulo acceso a los cargos de representación popular - Jornadas de trabajo largas de 12 hrs. en promedio - Limitada libertad de circulación - Desconocimiento de derechos reproductivos - Violencia asociada al alcoholismo - Limitada libertad de circulación

Un elemento del que me gustaría dejar testimonio es la existencia de lo podríamos llamar una brecha generacional, las hijas de estas mujeres líderes acceden ya a mayores libertades, conocimientos e importantes compromisos con las organizaciones de sus madres y en la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. Lo mismo pudimos observar para otras jóvenes que si bien sus madres no forman parte del grupo de mujeres líderes, si tienen acceso a la educación, a la computación, tienen una gran influencia de la información de masas y es claro el deseo de no mantener las tradiciones que las excluyen, pues las que más participaban en los talleres eran ellas, y fueron quienes más cuestionaron su exclusión, su deseo de no casarse aún siendo niñas, con hombres que ellas no eligen, y su interés por continuar estudiando alguna carrera, y muchas más con deseos de salir de sus comunidades para alcanzar un mejor nivel de vida.

Reflexiones finales

He querido mostrar en este trabajo que la construcción de la multiculturalidad en México ha tenido avances importantes en las últimas dos décadas, sin embargo, que los reconocimientos a nivel constitucional no responden a los reclamos del movimiento indígena organizado, en este sentido una de las recomendaciones que hizo el relator de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la ONU al gobierno mexicano, fue la necesidad de volver a discutir la ley indígena nacional, respetando lo acordado y pactado en San Andrés Larraizar entre el EZLN y el gobierno federal, que quedaron plasmados en la conocida como ley COCOPA, para poder solucionar el conflicto en Chiapas y responder a los reclamos indios.

También he querido señalar que para construir un modelo social donde la multiculturalidad pueda convivir de forma armónica y respetuosa, no basta legislar reconociendo derechos colectivos, sino que es necesario acompañar este proceso con uno que brinde mayor democracia y equidad para los pueblos indios.

La experiencia en este proyecto sobre los derechos de las mujeres en los usos y costumbres, nos brindó además de la posibilidad de documentar y dar voz a las cientos de mujeres que buscan cambiar las prácticas que las mantienen sin voz y sin poder de decisión, significó iniciar en muchas comunidades y municipios un primer acercamiento a difusión de sus derechos, esta experiencia no hubiera sido posible sin el compromiso de las 10 mujeres que participaron como becarias. Mujeres indígenas que cotidianamente enfrentan varias jornadas de trabajo, en el hogar, en sus organizaciones y ahora como promotoras de los derechos humanos, es un trabajo arduo y difícil porque van acumulando y escuchando agravios a los que no es sencillo encontrar una solución. Además en los talleres de reflexión siempre emergen situaciones fuertes, y para las mujeres que asisten a los talleres tampoco es fácil expresar lo que sufren en carne propia y cuando si lo pueden hacer, se deben buscar estrategias de apoyo, formar grupos de acompañamiento y crear redes de solidaridad entre ellas, para que la defensa de los derechos vaya convirtiéndose en una realidad.

Otra de las certezas que nos dejó este proyecto es que indudablemente la presencia institucional debe dirigirse a estas zonas, que son las más pobres, las más alejadas, las más desconocedoras de sus derechos y son hasta ahora las menos atendidas. Adicionalmente tenemos que hasta hoy día es muy complicado que una mujer que denuncia una violación a sus derechos encuentre sensibilidad y apoyo de sus propias autoridades y salir fuera de su comunidad ya sea a la cabecera municipal o a la capital del estado en busca de apoyo sigue siendo una po-

sibilidad remota, primero por las restricciones de circulación, por ignorancia de los organismos que pudieran apoyarla y por la falta de recursos económicos que significa en nuestro país intentar acceder a la justicia del Estado.

De ninguna manera quiero afirmar contundentemente que existe una ausencia de las instituciones gubernamentales que tiene como una de su tareas básicas el llevar programas y apoyos a las regiones indígenas, este proyecto es un buen ejemplo de esta presencia, sin embargo, hasta hoy son pocos y sus alcances reducidos, pero si quisiera señalar que varios de los proyectos gubernamentales que existen están generando algunos cambios, por ejemplo el programa federal conocido como "Oportunidades", continúa redistribuyendo recursos económicos a familias en extrema pobreza, en las regiones que estuvimos encontramos datos interesantes, por ejemplo el programa de becas escolares, que por acuerdo federal da prioridad a becar a niñas para reducir la brecha entre ellas y los niños, esto ha estimulado a que muchos padres las manden a la escuela, si no por convicción, si por el cheque, y seguramente generará cambios positivos para las mujeres, otro de los rubros que está teniendo impacto es el hecho de que cuando se es beneficiario de algunos de los programas asistenciales, los beneficiarios deben comprometerse a cumplir con ciertas actividades como son por ejemplo, asistir a una consulta médica, el mismo día y en el lugar en que se entrega el dinero, a pláticas de planificación familiar, sobre SIDA, hábitos de limpieza, entre otros. Lo mismo ocurre para aquellas mujeres que están siendo beneficiadas con los programas de apoyo a proyectos productivos, los Fondos Regionales, buena parte de los cuales están dirigidos a mujeres, y como parte de los compromisos asumidos con sus proyectos, están el asistir a diferentes cursos y talleres de capacitación, que van desde temas de producción, administración, hasta talleres de derechos humanos y derechos de las mujeres, esta práctica sin duda está cambiando a las mujeres, nosotros encontramos una gran diferencia entre las mujeres que participan en alguno de estos proyectos, pues tenían una mayor apertura, mayor participación, incluso mayor desenvolvimiento oral en la sesiones y un conocimiento mayor de sus derechos, esto ocurre por ejemplo en Chicontepec, Veracruz o en Tlaola, Puebla. Nuevamente existe una distinción de acuerdo al municipio, los más pobres, alejados y sin recursos, son los que menos presencia tienen de estos programas gubernamentales, de organizaciones o fundaciones, paradójico y lamentable.

Finalmente me gustaría terminar señalando que una sociedad multicultural como la mexicana debe construirse desde el Estado, con una sociedad civil informada de la diversidad que le es connatural, con la construcción de una cultura del respeto de los derechos humanos y apoyando de manera decidida los esfuer-

rzos que desde los microespacios y desde la cotidiana realizan mujeres ejemplares como las de esta experiencia.

BIBLIOGRAFÍA:

- AGUIRRE Irma, 2003, Participación política y social de mujeres indígenas: el caso de una lideresa tradicional, en: *Cuicuilco*. Nueva Época volumen 10, No. 27, enero-abril, Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). México.
- BARRERA Dalia, comp., 2002, *Participación política de las mujeres y gobiernos locales en México*. GIMTRAP, México.
- BONFIL Paloma, 2003, ¿Obedecer callando o mandar obedeciendo? en: *México Indígena*, Vol. 2 septiembre. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). México.
- CHANCOSO Blanca, 1997, *Segundo Encuentro Continental de mujeres indígenas*. México. (fotocopias)
- DALTÓN Margarita, 2003, Las presidencias municipales en Oaxaca y los Usos y Costumbres, en: BARRERA Dalia, MASSOLO Alejandra, comp., GIMTRAP-PNUD-INM. México.
- DE LA PEÑA Guillermo, 1999, Territorio y ciudadanía étnica en la Nación Globalizada, en: *Desacatos*, No. 1. CIESAS, México.
- DIAZ-POLANCO Héctor, 1996, Autonomía, territorialidad y comunidad indígena, en: GONZÁLEZ CASANOVA Pablo, ROITMAN Marcos, coords., *Democracia y Estado Multiétnico en América Latina*. La Jornada-CEIHH-INAM, México.
- DIAZ-POLANCO Héctor, 1997, *La rebelión zapatista y la autonomía*. Siglo XXI, México.
- GÓMEZ Magdalena, 2001, La constitucionalidad pendiente: análisis del proceso mexicano de reformas en materia indígena, ponencia presentada en el Seminario *Tratados y otros acuerdos constructivos entre Estados y pueblos indígenas*. Sevilla, España.
- GUTIÉRREZ Margarita, PALOMO Nellys, 1999, Autonomía con mirada de mujer, en: BURGUETE, Aracely, coordinadora, *México: Experiencias de Autonomía Indígena*. Documento IWGIA No. 28, Copenhague, Dinamarca.
- GUTIÉRREZ Miguel Ángel, 2001, *Déspotas y caciques. Una antropología política de los amuzgos de Guerrero*. Textos de Investigación. Universidad autónoma de Guerrero, México.
- HERNÁNDEZ Aída, 2000, Distintas maneras de ser mujer: ¿Ante la construcción de un nuevo feminismo indígena?, en: *Memoria*. No. 132. México.
- Informe del Relator Especial sobre la Situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. 2003, ONU, Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos. 60º periodo de sesiones. Tema 15 del programa provisional. Adición Misión México.
- KIMLICKA Will, 1996, *Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías*. Piados, España.
- MONTOTOY Rodrigo, 1996, La ciudadanía étnica como un fragmento en la utopía de la libertad, en: GONZÁLEZ CASANOVA Pablo, ROITMAN Marcos, coords, *Democracia y Estado Multiétnico en América Latina*. La Jornada-CEIHH-INAM, México.
- ITURRALDE Diego, 1993, Usos de la Ley y usos de la costumbre: La reivindicación del derecho indígena y la modernización del Estado, en: WRAY Alberto, et. al. *Derecho, pueblos indígenas y reforma del Estado*. Biblioteca Abya-Yala, Quito, Ecuador.
- OEHMICHEN Cristina, 1999, *Reforma del Estado. Política Social e Indigenismo en México, 1988-1996*. Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM. México.

- ROUDALND André, PIERRE-CAPS Stéphane, POUMARÈDE Jaques, 1999, *Derecho de minorías y pueblos autóctonos*. Siglo XXI, México.
- RUIZ Margarito, 1999, La Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA). Proceso de construcción de una propuesta legislativa autonómica nacional. en: BURGUETE, Aracely (Coordinadora) *México: Experiencias de Autonomía Indígena*. Documento IWGIA No. 28, Copenhague, Dinamarca.
- STAVENHAGEN Rodolfo, 1988, *Derecho indígena y derechos humanos en América Latina*. COLMEX-Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), México.
- TORRES Jaime, 2000, *Las luchas indias por el poder local: los casos de Huehuetla, sierra Norte de Puebla y Rancho Nuevo de la Democracia, Guerrero*. Tesis de Maestría CIESAS, México.
- VALLADARES Laura, 2002, Cambiando la tradición: Desafíos y conquistas de las mujeres indígenas en México. en: *Revista de Divulgación Científica Multidisciplinaria*. Año 3, enero-marzo. FES-Cuautitlán-UNAM. México.
- VALLADARES Laura, 2004, Democracia y Derechos indios en México: la ciudadanía multicultural como modelo de paz, en: *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, no. 188-189. División de Estudios de Posgrado-Facultad de Ciencias Políticas. UNAM, México.
- VELÁSQUEZ Cristina, 2003, Discriminación por género y participación en los sistemas de gobierno indígena: contrastes y paradojas. en: BONFIL Paloma y MARTÍNEZ Elvia, *Diagnóstico de la discriminación hacia las mujeres indígenas*. Colección Mujeres Indígenas, CDI, México.
- WILLEM ASSIES, VAN DER HAAR Gemma y HOEKEMA André, 1999, La diversidad como desafío: una nota sobre los dilemas de la diversidad, en: WILLEM ASSIES, VAN DER HAAR Gemma y HOEKEMA André, *El reto de la diversidad*. El Colegio de Michoacán, México.
- WILLEM ASSIES, et. al, 2002, *Ciudadanía, cultura política y Reforma del Estado en América Latina*. El Colegio de Michoacán-Instituto Federal Electoral de Michoacán, México.